

República Democrática del Congo: Tragedia olvidada de derechos humanos en la provincia de Ituri

Las autoridades de Uganda deben llevar a los presuntos autores de los gravísimos abusos contra los derechos humanos cometidos en Ituri ante los tribunales ugandeses, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre el agravamiento de la situación en la provincia de Ituri, situada en la parte nororiental de la República Democrática del Congo.

«No debe existir un refugio posible para las personas sospechosas de haber cometido violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ituri y otras partes de la República Democrática del Congo — señala Amnistía Internacional—. Los presuntos autores localizados en territorio ugandés o en zonas de la República Democrática del Congo bajo control ugandés, con independencia de su nacionalidad, deben ser objeto de investigación y comparecer ante la justicia.»

El informe de Amnistía Internacional, titulado *On the precipice: the deepening human rights and humanitarian crisis in Ituri (Al borde del precipicio: el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Ituri)*, documenta algunos de los graves abusos cometidos recientemente en Ituri, donde se calcula que unas 50.000 personas han muerto y más de 500.000 han tenido que desplazarse desde 1999 como consecuencia de los combates librados en la región. Gran parte de la violencia tiene su origen en el conflicto armado entre los grupos étnicos hema y lendu, conflicto que ha sido manipulado y exacerbado por los dirigentes de los grupos políticos armados que se disputan el control político y económico de la región.

Los grupos políticos armados y las milicias basadas en grupos étnicos han cometido homicidios ilegítimos, actos de tortura —incluidas violaciones— y otros abusos graves contra los derechos humanos en Ituri, frecuentemente en escala generalizada. La mayoría de las víctimas eran civiles, convertidos en blanco de los abusos por la única razón de su identidad étnica. Tales abusos se han incrementado en los últimos meses. «Amnistía Internacional ha pedido a estos grupos y milicias que acaben inmediatamente con los homicidios ilegítimos y otros abusos contra civiles y combatientes que ya no toman parte en las hostilidades.»

La necesidad de una acción internacional enérgica para proteger a la población civil

En vista del empeoramiento progresivo de la crisis en Ituri, Amnistía Internacional ha vuelto a pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que refuerce urgentemente la presencia de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) en la región, que cumpla con su mandato de «proteger a los civiles amenazados con sufrir violencia física de forma inminente» y que contribuya a establecer las condiciones necesarias para la entrega segura de las provisiones humanitarias que la población civil de Ituri necesita desesperadamente.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda presentes en Ituri que acaten las obligaciones contraídas por el gobierno ugandés en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario para proteger la vida de la población civil en la región. Las propias Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en la provincia, incluido el homicidio ilegítimo de civiles indefensos. Según informes, miembros de estas fuerzas han vendido armas a los grupos étnicos enfrentados y han entrenado a milicias, en cuyas filas había niños soldados. Los repetidos cambios de respaldo político ugandés a los grupos políticos armados rivales en Ituri han contribuido a agravar y prolongar la crisis.

«Uganda asegura que actúa en favor de la paz y la reconciliación en la región, y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda han intervenido ocasionalmente para detener el enfrentamiento entre fuerzas rivales. Pero, en general, la conducta de estas fuerzas y del gobierno de Uganda en relación con Ituri ha contribuido de manera importante al caos y la violencia que se han adueñado de la región, sembrando la discordia entre los grupos étnicos y fomentando la inseguridad reinante.»

La justicia, indispensable para resolver la crisis

Los presuntos autores de los graves abusos cometidos en Ituri no han sido procesados, a pesar de que en algunos casos han sido identificados públicamente. «Quienes cometen y ordenan estos crímenes obtienen su poder, su riqueza y su fuerza de la impunidad, lo que refuerza el ciclo de desorden y violencia en la región» ha señalado Amnistía Internacional.

La organización ha instado al gobierno ugandés y a la comunidad internacional a acabar con la impunidad de que disfrutaban estos individuos investigando los abusos cometidos en Ituri y llevando ante los tribunales a los presuntos autores, ya sean miembros de grupos políticos armados o de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda. El gobierno de Uganda, en virtud del artículo 146 del Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, tiene la obligación de «buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer [...] infracciones graves [del Convenio] y [...] hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad». Tales «infracciones graves» incluyen el homicidio intencional, la tortura y el trato inhumano.

Amnistía Internacional ha pedido también al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca una comisión internacional para investigar las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la República Democrática del Congo, incluidas las cometidas en Ituri. La organización considera que dicha comisión debería además formular recomendaciones para que se procese a los autores de los abusos, incluso ante tribunales nacionales.

Una lista creciente de abusos masivos contra los derechos humanos

Al parecer, cinco grupos políticos armados y milicias asociadas que se disputan el control de la región de Ituri han cometido graves abusos contra los derechos humanos recientemente. Estos grupos son:

La Unión Congoleesa para la Democracia-Movimiento de Liberación (*Rassemblement congolais pour la démocratie - Mouvement de libération, RCD-ML*), asociada con frecuencia a milicias de la etnia lendu. Según informes, centenares de civiles de los grupos étnicos hema y bira fueron víctimas de homicidio ilegítimo durante un ataque conjunto de este grupo y la milicia lendu contra la localidad de Nyankunde en septiembre de 2002.

El Movimiento por la Liberación del Congo (*Mouvement pour la libération du Congo, MLC*).

La Unión Congoleesa para la Democracia - Nacional (*Rassemblement congolais pour la démocratie - National, RCD-N*). Entre octubre y diciembre de 2002, según informes, fuerzas del Movimiento por la Liberación del Congo y de este grupo mataron de forma ilegítima a más de un centenar de civiles, además de cometer otros abusos graves contra los derechos humanos —como violaciones— en la localidad de Mambasa y sus inmediaciones.

La Unión de Patriotas Congoleeses (*Union des Patriotes Congolais, UPC*).

Combatientes de este grupo y de la milicia hema, asociada a él, fueron responsables de una avalancha de homicidios ilegítimos y actos de tortura o malos tratos contra individuos no pertenecientes al grupo étnico hema o contra destacados miembros de esta etnia sospechosos de disidencia cuando la Unión de Patriotas Congoleeses gobernó en Bunia y otras localidades entre agosto de 2002 y marzo de 2003.

El Frente para la Integración y la Paz en Ituri (*Front pour l'intégration et la paix en Ituri, FIPPI*), grupo escindido de la Unión de Patriotas Congolese y último grupo político armado surgido en febrero de 2003 con apoyo ugandés.

Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda también han cometido graves abusos en Ituri. Por ejemplo, en febrero de 2002 se recibieron informes según los cuales una unidad de estas fuerzas había matado de forma ilegítima hasta un total de 80 civiles, la mayoría de la etnia lendu, en la región de Gety. Además, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda no han protegido a la población civil frente a los homicidios y otros abusos perpetrados por los grupos políticos armados o las milicias, absteniéndose de intervenir o haciéndolo tardíamente, a pesar de su inequívoca autoridad militar en las zonas donde se cometieron esos abusos.

Información general

La provincia de Ituri se encuentra sometida al control directo o por delegación de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda desde que estalló el conflicto en la República Democrática del Congo en agosto de 1998. La totalidad de los cinco grupos políticos armados que actúan en Ituri son, de un modo u otro, protegidos del gobierno ugandés. El respaldo de Uganda a los grupos, sin embargo, ha ido cambiando constantemente, lo que ha fomentado la inestabilidad en la región.

Una y otra vez la capital de la provincia, Bunia, y otras localidades clave han ido cayendo en poder de distintos grupos políticos armados. Recientemente, el 6 de marzo de 2003, la Unión de Patriotas Congolese, que había arrebatado el control de Bunia a la Unión Congolese para la Democracia-Movimiento de Liberación con la ayuda de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en agosto de 2002, fue expulsada de Bunia por estas mismas fuerzas. El último combate librado por el control de Bunia causó la pérdida de vidas civiles y graves daños en propiedades, incluidas las sedes de varias organizaciones humanitarias que, según informes, fueron saqueadas por combatientes.

Documento público

Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <<http://news.amnesty.org>>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en<<http://www.edai.org/centro/news.html>>.